

# Memoria justificativa de la necesidad

---

---

**“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE OFICINA DE GESTIÓN DE  
PROYECTOS Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DE  
HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS  
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES  
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR  
PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA  
HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 Y  
FUTURAS PANDEMIAS, POR TRAMITACIÓN DE  
EMERGENCIA”**

---

---



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1259149096632963773813**



## **MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 Y FUTURAS PANDEMIAS, POR TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA.**

Con fecha 31 de enero de 2020, la OMS declaró el brote de SARS-CoV-2 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Los primeros casos en la Comunidad de Madrid se confirmaron el 26 de febrero, se trataba de dos casos con vínculo epidemiológico de viaje a zona de riesgo. El día 27 de febrero se diagnostican en la Comunidad de Madrid los primeros casos sin vínculo epidemiológico dentro del criterio B (cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda con criterios de gravedad en la que se hayan descartado otras posibles etiologías infecciosas que puedan justificar el cuadro). Desde esa fecha hasta la actualidad el ascenso en el número de casos confirmados ha sido exponencial y según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del COVID-19, si no se toman medidas de distanciamiento, el número de casos confirmados podría ascender a una cifra difícilmente asumible.

De acuerdo con lo previsto en el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, las distintas Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

El Real Decreto-Ley 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, habiéndose prorrogado dos veces y fijándose, por el momento, como límite temporal de su vigencia el 26 de abril. Este real Decreto ha activado una serie de medidas que afectan a la continuidad de muy diferentes sectores de la actividad productiva del país, así como al régimen de vida ordinario de los ciudadanos tanto en el ámbito personal y familiar como en el profesional. Todas estas medidas tratan de hacer frente a la situación de crisis sanitaria que ha ocasionado la pandemia generada por el COVID-19 hasta el 26 de abril.

La Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, habilita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto



Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideran esenciales en el Anexo que acompaña a este Real Decreto- Ley. En concreto en su apartado 13, considera como esenciales:

*Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.*

A los efectos previstos en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se informa lo siguiente:

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (en adelante Madrid Digital), según se establece en el Artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, modificada parcialmente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 2015) se configura como un ente público de los previstos en el Artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid que, perteneciendo a la administración institucional de ésta, cuenta con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, y autonomía de gestión.

El referido precepto encomienda a esta Agencia, entre otras, las funciones de la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde particularmente la administración, mantenimiento y soporte de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones de cualquier especie que se encuentren instalados en la misma, así como el desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información para la Comunidad de Madrid, y su mantenimiento y soporte posteriores, la dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte a los sistemas de información y comunicaciones (Artículo 10 - Tres c).

Ante la situación actual en España, y dado que la extensión temporal del estado de alarma se prevé que se alargue en el tiempo, es imprescindible la adopción de medidas excepcionales de transformación digital del sector público de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis del Covid-19 y futuras pandemias.

Por todo ello, se hace necesario acudir a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector



Público (LCSP) para contratar los servicios objeto del presente expediente. Es absolutamente imprescindible la contratación por emergencia, al ser este el único supuesto en el que la LCSP permite iniciar la contratación sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la misma, incluido el de existencia de crédito suficiente.

El artículo 120 de la LCSP señala a este respecto lo siguiente:

“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

- a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, a contratar libremente su objeto, en todo o en su parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria...
- c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
- d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.”

Ante la declaración de la crisis sanitaria desencadenada con la propagación del coronavirus (COVID19) en nuestro país, la Comunidad de Madrid está adoptando las medidas para que la continuidad de los servicios esenciales se vea garantizada.

Siendo la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid la entidad pública competente para la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones en este ámbito autonómico, los servicios que presta son identificados como esenciales, lo que obliga a que esta Entidad garantice su mantenimiento y continuidad durante este período de emergencia sanitaria.



El enorme proceso de globalización en la cual la sociedad lleva inmersa los últimos años, ha jugado un papel que favorece la propagación de la pandemia, que obliga a tomar medidas que puedan desplegar sus efectos más allá de sus fronteras físicas, con la coordinación de las distintas administraciones públicas competentes, tratando de globalizar los resultados de las actuaciones que se lleven a cabo.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como la digitalización y determinados avances tecnológicos como la robotización, la inteligencia artificial o la tecnología de registros distribuidos, pueden jugar un papel esencial en la adopción de medidas que permitan, en primer lugar, coordinar adecuadamente los mecanismos de control y seguimiento de la pandemia y, en segundo lugar, preparar los instrumentos con los que debe contar la Administración de la Comunidad de Madrid ante posibles brotes o repuntes futuros de la pandemia.

Por lo expuesto, la Comunidad de Madrid considera imperioso y necesario, poner en marcha un ambicioso proyecto que permita ir desarrollando aplicativos y medidas informáticas y tecnológicas concretas que vayan impulsando la recuperación de la sociedad, y preparen el funcionamiento de la Administración regional ante futuros brotes o repuntes de la pandemia.

Ante esta situación y como única vía para poder garantizar con la inmediatez necesaria la prestación de un servicio identificado como crítico, que necesariamente debe estar en funcionamiento desde abril se ha acudido al procedimiento de emergencia que establece el art. 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

Se concluye pues que es necesario acudir al presente procedimiento para contar con un gran desarrollador tecnológico que dote a la Comunidad de Madrid de determinadas herramientas y dispositivos tecnológicos adecuados durante la presente pandemia.

El alcance de los servicios a contratar será el siguiente:

1. Gobierno del Servicio y Oficina de Gestión de Proyectos que consistirán en:
  - Proponer de manera proactiva y/o estudiar iniciativas de Madrid Digital o de terceros cuya finalidad sea facilitar la vuelta a la normalidad desde la situación de confinamiento.
  - Elaborar información con detalle suficiente para que Madrid Digital pueda decidir sobre la conveniencia de profundizar en el análisis detallado y posterior desarrollo de las iniciativas propuestas.
2. Servicios de diseño y desarrollo para aquellas iniciativas aceptadas por Madrid Digital, este equipo de expertos deberá adicionalmente:



- Configurar un equipo de diseño de la solución informática, que realice una propuesta con estimación vinculante en esfuerzo y plazo, que deberá ser validada por Madrid Digital antes de su ejecución.
- Configurar un equipo de desarrollo, asumiendo las labores de gobierno y gestión de dichos desarrollos (oficina de proyectos), garantizando en todo momento a la Dirección de Madrid Digital la visibilidad sobre la ejecución y avance de los mismos.

Para ello, Madrid Digital requiere contar con un Equipo de Trabajo fijo cuyo objeto es el Gobierno del Servicio y Oficina de Gestión de Proyectos, y con unas capacidades variables para resolver los incidentes que se presenten como consecuencia de la situación de pandemia. Estos servicios se solicitarán y comprometerán uno a uno por Madrid Digital a partir de las iniciativas presentadas, y consistirán en la definición/diseño de las soluciones informáticas, para posteriormente desarrollarlas y evolucionarlas.

#### OBJETO

El contrato tiene por objeto la prestación de los **SERVICIOS DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y EL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA HACER FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 Y FUTURAS PANDEMIAS**, por plazo estimado de cuatro meses.

#### IMPORTE ESTIMADO

El importe estimado para la contratación de los servicios anteriormente descritos asciende a un máximo de 482.000,00.- euros, IVA incluido.

La autorización de la solicitud de servicio fue aprobada con carácter de urgencia el día 14 de abril de 2020.

*La Directora de Innovación y Transformación Digital de Servicios*

*P.S. (Resolución nº 209/2020, de 14 de abril, de la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la C.M.)*

*Fdo.: Marta Bilbao Egido*

